

El modelo económico chileno en democracia

Desafíos y perspectivas (1990-2005)

Manuel Gárate Chateau

EN LA ACTUALIDAD, CUANDO SE HACE REFERENCIA A CHILE, suelen destacarse dos puntos que generalmente van de la mano. Por una parte, se menciona la estabilidad política del país durante los quince años transcurridos desde el retorno a la democracia, y, por otra, se destacan los equilibrios financieros de la economía chilena y sus altas tasas de crecimiento, principalmente, entre 1990 y 1997, las cuales alcanzaron, como promedio, un siete por ciento anual del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra es sólo comparable al crecimiento de países como Malasia, Indonesia o Tailandia a fines de los 80 e inicios de los 90. Tales resultados han dado pie a numerosas comparaciones respecto de la situación del resto de los países de la región, llegándose incluso a hablar de un «milagro económico chileno». No obstante, se conoce bastante menos sobre las características propias del modelo y el continuo debate que suscita en el interior de la sociedad chilena.

Producto de la denominada Crisis Asiática y la fuerte caída de las exportaciones chilenas debido a la contracción de los mercados mundiales a partir de 1997, se instala en Chile una fuerte discusión en torno a las fortalezas y debilidades del modelo económico. Esto se ha hecho evidente, especialmente, en períodos de crisis o baja del ciclo económico. El punto de mayor debate es la supuesta vulnerabilidad de una economía abierta frente a las oscilaciones de un mercado internacional volátil e inestable, sobre todo, cuando existe una dependencia tan marcada respecto de la exportación de un número limitado de productos primarios o *commodities* (cobre, celulosa, harina de pescado, minerales no metálicos y fruta fresca), cuya demanda se ve bruscamente afectada ante cualquier crisis internacional o incertidumbre política.

La estabilidad está, entonces, constantemente amenazada por la doble dependencia del precio de los *commodities* y, al mismo tiempo, por las variaciones del precio internacional de los combustibles, que influyen de manera significativa en los costos de producción y en la tasa de inflación. Chile importa actualmente más del 60 por ciento de sus requerimientos de energía en forma de petróleo (95 por ciento importado), carbón y gas natural. Otra crítica importante al modelo de desarrollo chileno es su enorme brecha en la distribución del ingreso y el impacto que tiene la economía de exportación de productos primarios sobre el medioambiente.

Tras la bonanza de comienzos de los 90, se inicia, a partir de 1998, un período de cuestionamiento y fuertes críticas –especialmente provenientes de algunos sectores de la izquierda democrática (los *autoflagelantes*) y del centro político (los *autocomplacientes*) en el interior de la propia coalición que gobierna el país desde 1990– respecto al modelo económico heredado de la dictadura militar.

No puede dejar de mencionarse el marcado carácter presidencialista del sistema político chileno y la fuerte influencia del Poder Ejecutivo en el manejo de la economía y las cuentas fiscales. El inicio de un nuevo Gobierno de la Concertación, comandado esta vez por la presidenta Michelle Bachelet, parece augurar un período de bonanza económica, marcado por las inmejorables cifras con las que comienza su gestión.

EL DESEMPEÑO RECIENTE DE LA ECONOMÍA CHILENA (2003-2005)

La economía chilena, entre 2003 y fines de 2005, ha tenido un desempeño positivo producto de las auspiciosas señales provenientes, especialmente, del sector externo. Esto ha permitido superar algunos temores surgidos de la crisis de 1998-99 y, al mismo tiempo, dar mayores márgenes de maniobra al Gobierno del presidente Ricardo Lagos, quien debió iniciar su mandato en el momento más depresivo del ciclo económico (marzo de 2000), justamente cuando el PIB alcanzaba un -0,8 por ciento y la tasa de desempleo se acercaba al diez por ciento: cifra considerada como el límite tolerable para la mayoría de los analistas económicos.

Las buenas cifras económicas de 2004 y 2005 se deben, en gran medida, al aumento de cantidad y valor de las exportaciones producto de las señales internacionales que apuntan hacia una recuperación de la economía mundial. Las autoridades económicas esperan que gracias a los recientes Tratados de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur y, ahora, China, aumente significativamente el intercambio con estos importantes mercados externos, dinamizando aún más la economía, gracias a la reactivación de la demanda y la inversión interna. La cantidad y precio de las exportaciones chilenas podrían verse aún más beneficiadas tras la pronta firma de un acuerdo comercial (TLC) con India, una de las economías mundiales con mayores tasas de crecimiento.

El ambiente que se vive hoy en Chile ha vuelto a poner en discusión la posibilidad de retomar la senda de crecimiento de la primera mitad de los 90, es decir, entre el seis y el siete por ciento del PIB, considerado el mejor desempeño económico en la historia del país y un caso especial en América Latina. Fue así como se logró disminuir el índice de pobreza desde un 36 por ciento a un 18,8 por ciento de la población entre 1990 y 2003. En este sentido, las cifras económicas de agosto de 2004 son las mejores de los últimos seis años, pues implican un aumento de 7,5 por ciento en el índice de actividad económica, un precio del cobre inusualmente alto y un nivel de inflación de apenas un 0,1 por ciento, acumulando un 2,3 por ciento en el último año. Esto último, a pesar de las fuertes variaciones en el costo de los hidrocarburos, especialmente en el caso del petróleo y el gas natural. Esta situación de relativa holgura le ha dado un auspicioso fin de mandato a la administración del presidente Lagos y a la coalición gobernante, la Concertación Democrática (originalmente Concertación de Partidos por la Democracia). Sin embargo, hace sólo tres años, la situación era completamente diferente, e incluso se especulaba sobre la crisis terminal de la alianza oficialista, producto de las malas cifras económicas y los escándalos de corrupción que estallaron públicamente a fines de 2002.

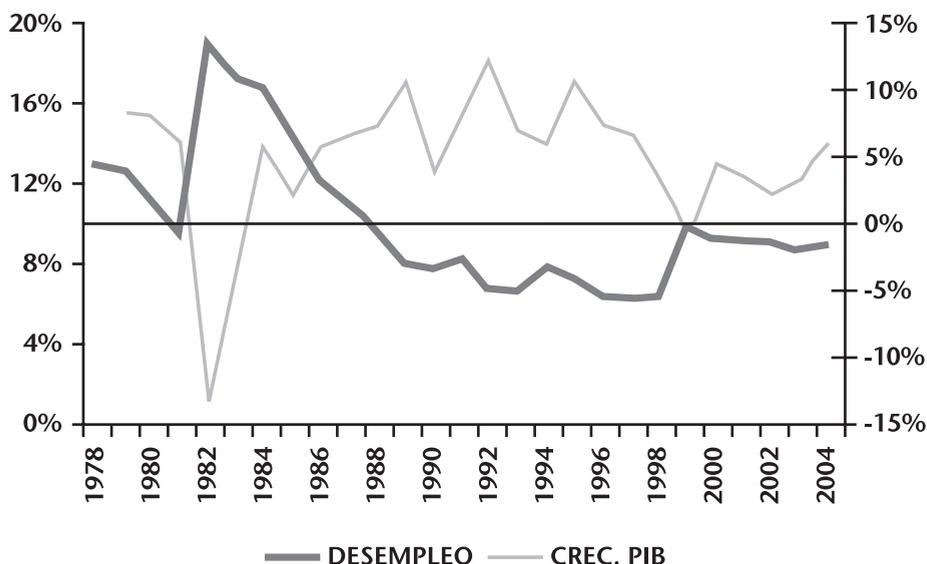
ACTIVIDAD ECONÓMICA. De acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central de Chile y al pormenorizado informe CEPAL (Comisión Económica para América Latina), la actividad económica chilena ha tenido un importante repunte durante los años 2003 y 2004. Es así como se estima entre un 4,5 por ciento y un 5,5 por ciento la tasa de crecimiento total, sustentada especialmente en la reactivación del sector minero, agrícola e industrial, lo cual también ha repercutido en el aumento del consumo interno.

INFLACIÓN. Ésta no superó el 3,5 por ciento de IPC (Índice de Precios al Consumidor) en el último año. En este sentido, los resultados de 2005 han demostrado la consistencia de las políticas de control de la inflación.

DESEMPLEO. Salta a la vista la gran paradoja entre crecimiento positivo y persistente tasa de desocupación, en torno al 8-9 por ciento, considerada muy alta a nivel político y académico. Este punto ha sido el gran dolor de cabeza para las autoridades de Gobierno y los economistas de ambos sectores políticos. Incluso dos reconocidos senadores y economistas, Carlos Ominami (Partido Socialista) y Alejandro Foxley (Democracia Cristiana), han reconocido la existencia de una desocupación de tipo estructural, ligada más bien a la modernización y especialización del sector productivo, que a los vaivenes de la economía mundial.

COMERCIO EXTERIOR. El sector exportador-importador, gracias a los tratados de libre comercio, registró un fuerte aumento de su actividad en los últimos meses de 2004, a pesar de la inestabilidad en el precio de la divisa, alcanzando un superávit en la balanza comercial de 2.200 millones de dólares. De acuerdo a las cifras del instituto emisor, el principal destino de

GRÁFICO 1
DESEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: 1978-2004



Fuente: Fundación Expansiva

las exportaciones chilenas, durante 2003, fue el continente asiático (31 por ciento), seguido por Europa (veinticinco por ciento), América Latina (diecinueve por ciento) y Estados Unidos (dieciocho por ciento).

COMPROMISOS EXTERNOS. Con respecto a este punto, el informe CEPAL para Chile consigna que la deuda externa pública creció un 12,9 por ciento en 2003, en tanto que la deuda externa privada cayó desde el 49,7 por ciento del PIB en 2002 a 47,3 por ciento en 2003. En agosto del 2004 el *spread* del bono soberano chileno se acercaba a los 70 puntos, muy cercano a la cifra de países como China (69) o Polonia (64), lo cual permite al país tener un mejor acceso al crédito internacional y en condiciones más favorables.

LA POLÍTICA ECONÓMICA. La política económica del Gobierno del presidente Ricardo Lagos se caracterizó por el mantenimiento «a ultranza» de los equilibrios fiscales y de control de la inflación, lo que ha permitido tanto al Gobierno como a las empresas gozar de una buena evaluación externa en el momento de asumir obligaciones crediticias en el mercado internacional. La estrategia de apertura a los mercados mundiales mediante tratados comerciales y reducción unilateral de aranceles, acentúa aún más la dependencia respecto del sector exportador. En términos generales, éste ha sido el motor principal del crecimiento del PIB en los últimos años, lo que no se ha traducido en un aumento equivalente del consumo y la inversión interna a niveles, al menos, cercanos a los de 1998, cuando se inicia la Crisis Asiática.

AUSTERIDAD FISCAL. La regla de oro de la actual política económica de Chile consiste en el compromiso de mantener un superávit fiscal estructural (uno por ciento), sostenido en el tiempo, con un tipo de cambio flexible (dólar) y una inflación controlada mediante el instrumento tasa de interés (TPM). En Chile, debido a las reformas de la dictadura militar, la política monetaria es independiente de la política económica. Ello obliga a ambas partes, Banco Central (autónomo) y Gobierno, a mantener un flujo constante de información y, a la vez, restringe, al menos teóricamente, las presiones hacia la expansión del gasto que se originan desde el Poder Ejecutivo y Legislativo. Durante los últimos seis años, la recaudación impositiva del Estado se ha visto mermada por la reducción unilateral de aranceles y por los tratados de libre comercio, aunque compensada momentáneamente por el inusual precio del cobre. Esto ha significado un mayor esfuerzo para mantener el superávit fiscal y resistir las fuertes presiones expansivas del gasto.

POLÍTICA MONETARIA. En términos de política monetaria, las autoridades económicas se han propuesto un objetivo ambicioso del dos al cuatro por ciento de inflación anual, cumplido con creces durante el período 2003-2005. La banca privada ha visto aumentar sus ingresos a niveles récord en los últimos tres años, disminuyendo su cartera vencida y aumentando de manera importante su nivel y oferta de créditos. Chile es uno de los pocos países de la región cuyo sistema financiero no tiene una proporción mayoritaria de pasivos y activos en dólares, lo que ha generado un importante nivel de ahorro en moneda nacional.

TIPO DE CAMBIO. El Banco Central de Chile ha adoptado, desde 1999, una política de tipo de cambio flexible, ampliando al máximo una banda de flotación del dólar, cuya existencia no es admitida públicamente por las autoridades económicas. En términos prácticos, no existe un control explícito sobre el precio de la moneda norteamericana y la divisa se regula de acuerdo al libre juego de la oferta y la demanda. Esta medida ha sido criticada, especialmente, por sectores exportadores (agroindustria), quienes temen una creciente alza del peso chileno y la consecuente disminución de sus ingresos. El organismo emisor se ha comprometido a justificar y anunciar públicamente las intervenciones en el mercado del tipo de cambio, ratificando así su política general de no injerencia.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA. En el corto plazo, las dudas sobre la sustentabilidad de la reactivación económica surgen principalmente del sector energético, debido a la inestabilidad del precio internacional del petróleo y la incertidumbre sobre la continuidad del abastecimiento de gas natural proveniente de Argentina. La matriz energética chilena es tremendamente dependiente de los hidrocarburos y del régimen de lluvias (energía hidroeléctrica), lo cual agrega un grado de incertidumbre a la reactivación en curso.

**LOS DESAFÍOS DE LARGO PLAZO DEL MODELO
SOCIOECONÓMICO CHILENO Y EL DEBATE FRENTE
A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2005**

Los desafíos que enfrenta el modelo de desarrollo chileno son numerosos, y muchos tienen relación con temas de medio y largo plazo, como la acelerada degradación del medio ambiente, especialmente debido a la sobreexplotación de recursos forestales, mineros y marinos. La necesidad de alcanzar una segunda fase exportadora, que agregue mayor valor a los productos chilenos, y que, al mismo tiempo, favorezca la inversión local en ciencia y tecnología. No obstante, la élite política nacional ha enfocado el debate económico, por lo demás altamente centrado en la coyuntura, principalmente en dos aspectos: *el desempleo y la distribución del ingreso (pobreza)*. Al interior de dicho debate, afloran regularmente temas como la reforma de la salud, la educación y la modificación de las tasas impositivas.

Desempleo persistente

En Chile, la mayor parte de los economistas, de derecha como de centroizquierda, reconoce que la gobernabilidad y la estabilidad social corren peligro en la medida en que la economía chilena no mantenga tasas de crecimiento superiores al cinco por ciento anual por un período de al menos quince o veinte años, lo cual no ha ocurrido en forma estable desde 1997, cuando se inició la crisis de los mercados asiáticos. A partir de ese momento, el crecimiento del PIB ha mantenido un promedio de un 3,3 por ciento anual, superior al de la mayoría de los países de la región, pero insuficiente para hacer caer la cifra de desempleo por debajo del nueve por ciento. El fantasma del desempleo estructural se ha instalado en el debate económico y político chileno. A pesar de lo anterior, las cifras de 2004 y 2005 parecen augurar un nuevo ciclo de auge, producto de la alta demanda de materias primas, especialmente desde el sudeste asiático. La tasa de desempleo para el período noviembre 2005 – enero 2006 fue de apenas un siete por ciento, aunque marcada fuertemente por un ciclo exportador dependiente de la demanda asiática y un precio del cobre fuera de los promedios históricos.

Al menos en esta fase, el crecimiento no está relacionado con sectores o áreas que demanden gran cantidad de empleos, a la inversa de lo sucedido a principios de la década de los 90, cuando se crearon numerosos puestos de trabajo, gracias a las inversiones de capital de empresas mineras, eléctricas, agroindustriales y de infraestructura vial, y no se prevén otras de la misma envergadura en los próximos años. Éste es el planteamiento de economistas como Carlos Ominami y *thinks-tanks* progresistas como las fundaciones Chile 21 y la independiente TERRAM¹. Esta explicación intenta desvincular las causas del desempleo, únicamente, de las variaciones del ciclo económico, ligándolo, más bien, a las características propias del sistema productivo. Prueba de aquello sería que durante 1995-1997, período de mayor crecimiento de la economía chilena (ocho por ciento del PIB anual), el desempleo ya presentaba un aumento significativo. Hoy, la economía chilena crece, pero el nivel de empleo no aumenta a las tasas esperadas.

El sector exportador de productos primarios se ha capitalizado y, al mismo tiempo, ha visto renovados sus procesos productivos mediante la incorporación de tecnología. Esto se ha traducido en una menor demanda de mano de obra, mayor precariedad en el empleo, e incluso una eliminación creciente de puestos de trabajo.

La producción sobre la base de recursos naturales está altamente concentrada en no más de trece grandes empresas, que han visto caer sus niveles de ocupación en un dieciséis por ciento entre 1990 y 2003, a pesar de la bonanza y de la mejora en sus utilidades. Algunos argumentan que la solución al tema del desempleo no estaría sólo en la «receta del crecimiento», sino en la aplicación de políticas que estimulen un segundo ciclo de inversiones, intensivo en valor agregado, conocimiento y tecnología.

Por el contrario, los centros de pensamiento ligados a la centroderecha² y al mundo empresarial consideran la rigidez laboral y las políticas de empleo del Gobierno como las causas principales del persistente desempleo. Las soluciones planteadas por este sector suelen ser más bien clásicas y orientadas a favorecer a los sectores financiero y productivo, por la vía de reducciones impositivas, mayor flexibilidad laboral y reducción del gasto público.

Pobreza y distribución del ingreso

Las últimas cifras oficiales de MIDEPLAN³, de agosto de 2004, corroboradas por el Banco Mundial, indican que el diez por ciento de los hogares más ricos concentra el 41 por ciento de la riqueza, mientras que el diez por ciento más pobre apenas alcanza al 1,5 por ciento del ingreso nacional. Aún más preocupante es la cifra que indica que un veinte por ciento de los chilenos posee más del 60 por ciento de los recursos disponibles. Esto se traduce en que sólo un veinticinco por ciento de los hogares chilenos alcanza ingresos iguales o superiores al promedio nacional (\$US 940 por hogar). Lejos de disminuir, se ha producido un aumento sistemático en la diferencias de ingreso entre los sectores más pobres y los más ricos durante los últimos treinta años. Esto, a pesar del aumento significativo de los ingresos en todos los estratos producto del ciclo económico 1987-1998.

Las cifras entregadas por la última encuesta CASEN⁴ están distribuidas por deciles (diez por ciento) y muestran claramente la concentración del ingreso per cápita en el primer decil, el cual es 34,1 veces más rico que el último, siendo que el segundo decil posee sólo 12,7 veces el ingreso del decil más pobre. *Probablemente, junto al desempleo, sea éste el mayor desafío de la sociedad chilena en su búsqueda por alcanzar un desarrollo sustentable, al menos en lo que se refiere a la estabilidad social.* Todos los grupos han mejorado sus ingresos, pero el nivel en que lo ha hecho cada uno es absolutamente incomparable.

El instituto Libertad y Desarrollo⁵ (LyD), ligado al partido Unión Demócrata Independiente (UDI) y al candidato derechista a la presidencia, Joaquín Lavín, sostiene que el principal desafío radica en la imperiosa necesidad de potenciar el crecimiento económico como herramienta principal de superación de la pobreza. Para alcanzar esto, deben generarse las mejores condiciones

para la contratación de mano de obra y para el desarrollo de la actividad productiva: flexibilizar el mercado laboral para los jóvenes y las mujeres, y eliminar el salario mínimo legal. Consideran que de esta forma aumentarán los niveles de empleo y de ingreso para las familias más pobres. Por otra parte, disminuir o, al menos, congelar la carga impositiva a las empresas y a los particulares, para reactivar así la inversión productiva. Se niegan a alzas de impuestos destinadas al área social y abogan por una mejor focalización del gasto existente y por su descentralización, y recomiendan la entrega de los fondos sociales a organizaciones privadas de beneficencia, las cuales consideran más eficaces y menos corruptibles que aquellas gestionadas por el Estado.

También apuestan por la superación de la pobreza por medio de la educación, la cual consideran el gran artífice de la movilidad social en todo el mundo, mejorando su cobertura, pero también, y en esto ponen gran énfasis, su calidad. Proponen una mejora en los contenidos pedagógicos, pero también la autogestión de las escuelas y el paso a manos privadas de la administración de los fondos públicos destinados a la educación primaria y secundaria. La asignación de los recursos estaría entonces sujeta a la buena administración del dinero, pero especialmente al rendimiento académico de los estudiantes. En este punto, son muy críticos de la gestión del Gobierno de Ricardo Lagos, al cual consideran obsesionado con la cobertura y acceso a la educación, pero a costa de una deficiente calidad y administración de los recursos.

En síntesis, para este sector, las políticas redistributivas a nivel de salarios e impuestos, especialmente los progresivos, no tienen ningún beneficio social importante y sólo alimentan la burocracia estatal. Consideran que una mejor distribución del ingreso se produce en forma automática como resultado de las medidas anteriores, y que las diferencias de ingreso no son tan importantes como el crecimiento, el empleo y el acceso a una educación de calidad.

Por el contrario, los grupos pertenecientes a la coalición gobernante plantean que el papel del Estado es vital en la superación de la brecha que existe entre ricos y pobres. Sin dejar de reconocer la importancia de las políticas pro-empleo y pro-educación, subrayan la necesidad de más y mejores *medidas redistributivas como factor clave de mayor justicia social*, especialmente en el corto y medio plazo. Reconocidos expertos de la Democracia Cristiana como también de la fundación Chile 21⁶, vinculada al Partido Socialista, han defendido la necesidad de fortalecer estas políticas, especialmente aquellas relacionadas con la tasa impositiva que pagan las grandes empresas en Chile, a su juicio, una de las más bajas del mundo, y proporcionalmente menor a lo que pagan las personas y las PYMES⁷. De su análisis, se desprende que, en Chile, durante los últimos treinta años, se han priorizado los tributos al consumo y prácticamente no se han tocado las rentas, especialmente aquellas de los sectores de mayores ingresos.

Con relación a la educación, su diagnóstico no difiere fundamentalmente del expuesto anteriormente, con la salvedad del papel que ocupa el Estado

en la disminución de la brecha educacional y la necesidad de aumentar la cobertura de la educación preescolar (de cero a cinco años), sin desconocer la urgente necesidad de mayor financiamiento público para la educación superior (técnica y universitaria). Esta última alcanza niveles de cobertura bajísimos en los estratos más pobres, a causa de la extendida privatización de la enseñanza superior iniciada en la década de los 80. Para lograr lo anterior, consideran indispensable una reforma tributaria y una reducción importante de la elusión y evasión de impuestos por parte de las grandes empresas nacionales y transnacionales asentadas en Chile. El importante ingreso de divisas a las arcas fiscales durante 2004 y 2005 ha permitido implementar una política de crédito fiscal destinada a ampliar la cobertura de la educación superior, sobre todo, en los estratos medios de la sociedad chilena.

Un tercer elemento a destacar dentro de las medidas propuestas por este sector político es la inversión pública y privada en ciencia y tecnología, que hoy alcanza apenas a un 0,4 por ciento del PIB. Su propuesta plantea fortalecer el financiamiento de proyectos universitarios, evitando, al mismo tiempo, la fuga de cerebros al extranjero y promoviendo la innovación local. Esto llevaría finalmente a mejorar los niveles productivos de las empresas, aumentando el valor agregado de las exportaciones y generando más y mejores puestos de trabajo. Por último, aconsejan al Gobierno continuar con sus programas focalizados de lucha contra la pobreza, como es el caso del plan Chile Solidario, donde se destinan fondos y ayudas sociales para el diez por ciento más pobre de la población. Sin embargo, aún dejan fuera a un porcentaje importante de personas que, sin ser indigentes, se encuentran al borde de la miseria y, sin embargo, no reciben ayudas estatales.

A modo de síntesis, es importante destacar la enorme centralidad del debate económico como eje principal de la disputa política entre las dos coaliciones que monopolizan el poder en Chile: la Concertación (centroizquierda) y la Alianza por Chile (derecha).

El debate económico chileno tiene un carácter marcadamente ideológico, pues, las posturas tienden a ser maximalistas y prácticamente no hay diálogo entre los expertos economistas de un sector y del otro, al menos en la esfera pública. No obstante, existe un consenso generalizado en la élite política chilena respecto del manejo macroeconómico de las cuentas fiscales, algo que hoy se considera prácticamente como un tema «fuera de discusión». El verdadero combate de ideas se da a nivel de la microeconomía, la concentración de la riqueza y de sus efectos directos en la población. Ésta es la principal causa del debate, donde destaca —por ejemplo— el tema de la propiedad de los medios de comunicación y de quién los controla. En este sentido, la coalición de Gobierno se encuentra en desventaja frente al duopolio de la prensa controlado por dos consorcios privados de oposición⁸.

En Chile, siguiendo el modelo norteamericano, las políticas públicas tienden a ser concebidas en centros de estudios o *think-tanks*, aparentemente independientes, pero claramente ligados a los partidos políticos tradicionales.

Lo interesante del fenómeno es la acelerada tecnificación de la política, pues, quienes trabajan en estos centros son, generalmente, académicos y tecnócratas reclutados en las mejores universidades del país y con posgrados en el extranjero, preferentemente en Estados Unidos. Estas entidades influyen en el ámbito público en su calidad de soporte ideológico de los partidos políticos, pero, también, por medio de sus continuas publicaciones sobre temas coyunturales y gracias a sus conexiones nacionales e internacionales con el mundo universitario. Su legitimidad ya no radica en las estructuras democráticas partidarias. En cambio, mantienen estrechos lazos con el mundo empresarial y con organismos similares en todo el mundo. Los tradicionales líderes de la política chilena han ido perdiendo popularidad frente a los «expertos» economistas, quienes actualmente gozan de fama y figuración pública en los medios de comunicación.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre de 2005 han puesto a prueba, una vez más, a la Concertación que, a diferencia de 1999, termina su período con cifras económicas favorables y la popularidad del presidente Lagos en su cima. Las expectativas de la derecha se han visto mermaidas por el buen resultado de la Concertación en las últimas elecciones de octubre de 2004 (municipales) y diciembre de 2005 (presidenciales y legislativas), a lo cual se suma el precio histórico que ha alcanzado el cobre durante 2005, engrosando, como nunca, las arcas fiscales y mermando, de paso, uno de los puntos centrales de la crítica conservadora: el desempleo.

Desde el punto de vista institucional, Chile, finalmente, comienza a dejar en el pasado el diseño político heredado del período Pinochet, pues, recientemente, Gobierno y oposición acordaron poner fin a los senadores institucionales⁹ y devolver al presidente de la República la facultad de remover a los jefes de las cuatro ramas militares. Se logró, además, aprobar la disminución del mandato presidencial de 6 a 4 años sin reelección. Sin embargo, aún queda pendiente la reforma más importante a la Constitución de 1980, y que se refiere al sistema electoral binominal¹⁰, el cual beneficia a la segunda mayoría entregándole prácticamente el 50 por ciento de los escaños con menos del 40 por ciento de los votos. Este sistema ha generado un modelo de tipo bipartidista con dos grandes bloques políticos que excluyen a las minorías y concentran las decisiones políticas en la cúpula de los partidos. Esto ha ido mermando la legitimidad de un sistema donde la abstención electoral es ya un fenómeno preocupante. La modernización y democratización del sistema es una garantía de estabilidad política y económica, especialmente en un continente donde la tendencia ha sido recurrir a las soluciones de carácter populista.

En definitiva, la economía chilena parece haber recuperado su vigor tras la Crisis Asiática (1998-99) y la recesión posterior. Las cifras de 2004 y 2005 parecen confirmar un nuevo ciclo de crecimiento, a lo que se suma un reforzamiento de los lazos comerciales con Asia Pacífico, y próximamente con India. La reunión de la APEC¹¹, de Santiago, en noviembre de 2004, vino a confirmar la integración de Chile a esta zona económica, sin dejar de lado sus lazos comerciales con Europa y Estados Unidos. Queda por dilucidar si las autoridades chi-

lenas seguirán teniendo el mismo interés en reforzar la integración con los vecinos del MERCOSUR¹², del cual Chile es socio pero no miembro en plenitud. Las únicas nubes en el horizonte podrían surgir, entonces, de un mercado energético inestable en términos de precios y de abastecimiento, pero, principalmente, de las propias condicionantes estructurales del modelo económico chileno: la distribución del ingreso, el desempleo y las políticas de seguridad social en salud, educación y pensiones. Es justamente en lo social donde el recién estrenado Gobierno de Michelle Bachelet pretende poner el acento y saldar la deuda que aún carga la coalición que gobierna Chile desde 1990.

1 Referencia: www.terram.cl

2 Centro de Estudios Públicos e Instituto Libertad y Desarrollo.

3 Ministerio de Planificación y Cooperación (Encuesta CASEN 2003).

4 CASEN, Encuesta sobre Caracterización Socio-Económica Nacional.

5 Referencia: www.lyd.cl

6 Referencia: www.chile21.cl

7 Pequeñas y medianas empresas.

8 Grupo COPESA y grupo El Mercurio.

9 Incluye a los senadores no elegidos por votación popular, es decir, los vitalicios y los designados o autodenominados «institucionales».

10 El sistema binominal, establecido en las postrimerías de la dictadura militar, se aplica sólo para las elecciones de diputados y senadores del Congreso Nacional.

11 Asia - Pacific Economic Cooperation (APEC).

12 MERCOSUR, Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay).



Lunes 21 de diciembre.

Óleo sobre lienzo, 94 x 127 cm., 1974.

Colección Museo Organización de Estados Americanos, Washington, D.C.